Minuta Reforma al Código de Aguas.
29 de enero de 2018

En relación a las declaraciones del Ministro de Obras Públicas, sostenemos que la postura del ejecutivo, es miope respecto de la realidad a la que nos enfrentamos para la gestión del agua y que además es vulneratoria de derechos humanos, fundamentalmente por lo siguiente:

- La labor de los tomadores de decisiones, en relación a la gestión de recursos ambientales como lo es el agua, requiere que se determine un estatuto jurídico que basado en datos científicos, reconozca las dinámicas propias del componente ambiental que permitan su renovabilidad o sustentabilidad y permita por otra parte, la compatibilización con las necesidades e intereses que sobre dicho componente tengan los diferentes actores de una sociedad determinada.
- Bajo dicha premisa, creemos inaceptable lo sostenido por el Ministro de Obras Públicas en un diario de circulación nacional. Donde se esboza que el ejecutivo ingresará una indicación sustitutiva al proyecto que Reforma el Código de Aguas, en el cual no se legislará sobre el régimen de derechos de agua, sino que pretenderá alcanzar el óptimo de eficiencia por medio de instrumentos estratégicos e incentivos económicos a la asignación privada de los derechos de agua. Fundamentando que *“revisar el régimen de derechos del agua afecta la certeza jurídica y que es precisamente dicha “certeza jurídica” la que permite que los agentes económicos, personas o empresas, puedan beneficiarse si ahorran agua.”*
- Conforme a los datos de Naciones Unidas¹
 - El uso global del agua se ha multiplicado por seis en los últimos 100 años (Wada et al., 2016) y continúa creciendo de manera constante a una tasa aproximada del 1% anual (AQUASTAT, sin fecha). Se prevé que el uso de agua siga aumentando a nivel mundial en función del aumento de población, el desarrollo económico y los patrones de consumo cambiantes, entre otros factores. (p.11.)
 - 3.600 millones de personas en todo el mundo (casi la mitad de la población mundial) ya viven en áreas con escasez de agua por lo menos un mes por año, y esto podría alcanzar de 4.800 a 5.700 millones para el 2050.
 - Se estima que el 80% del total de las aguas residuales industriales y municipales se libera al medio ambiente sin ningún tratamiento previo, lo que resulta en un deterioro creciente de la calidad general del agua con

¹ Informe Mundial de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018

impactos perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas (WWAP, 2017). (p.16)

- El cambio climático afectará a la calidad del agua de varias maneras. Por ejemplo, los cambios en los patrones espaciales y temporales y la variabilidad de la precipitación afectan a los caudales de las aguas superficiales y por lo tanto a los efectos de dilución, mientras que los aumentos de temperatura causan una mayor evaporación de las superficies abiertas y suelos, y la transpiración incrementada por la vegetación reduce potencialmente la disponibilidad de agua (Hipsey y Arheimer, 2013). El oxígeno disuelto se agotará más rápidamente debido a las temperaturas más altas del agua y cabe esperar que un mayor contenido de contaminantes fluya a las masas de agua después de eventos extremos de lluvia (IPCC, 2014).(p. 19)
- Estos datos tiene su correlato en Chile. Es más, conforme a los datos aportados a la Comisión de agricultura del Senado, para efectos de presentar esta propuesta de indicación sustitutiva, indica que existe una menor disponibilidad de recursos hídricos, existiendo a lo largo de Chile una fuerte disminución en los caudales, que a su vez existe menor disponibilidad de aguas subterráneas. De manera tal que a diciembre de 2018, habían 79 comunas bajo decreto de Escasez, esto quiere decir dos millones de habitantes correspondiente al 11,6% de la población.
- Así la literatura científica y los datos tenidos a la vista para la toma de decisión evidencian que se hace necesario gestionar una problemática de seguridad hídrica, donde resulta elemental asegurar y garantizar la accesibilidad del agua para consumo y saneamiento.
- Con dicho objeto, la decisión que se tome respecto del régimen de las aguas es crucial. Pues mantener la duración indefinida y de libre transferibilidad de los Derechos de Aprovechamiento de agua, extrae del control, gestión y revisión que debe realizar el Estado frente a la asignación privada de un recurso que debe atender principalmente su utilización en calidad de bien público, y que supone ser objeto y finalidad de un régimen concesional.
- Esta cuestión riñe una supuesta seguridad jurídica economicista, desarrollada para legitimar un proceso de privatización y apropiación de las aguas irregular y antidemocrático, con la seguridad hídrica, que nos mandata como legisladores desarrollar modelos de gestión adecuados, que tengan además la particularidad de reconocer que bajo dicho modelo jurídico constitucional se regula el acceso al agua entendido como un derecho humano fundamental, “[e]l derecho humano al agua

es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”.²

² Observación Nº 15 2002 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales